

La inseguridad jurídica ahuyenta ya de España a los inversores

- ▶ La reforma energética amenaza con desatar una batalla jurídica. «Se repite la historia», denuncian los fondos
- ▶ El intervencionismo del Gobierno penaliza la imagen de España, mientras Madrid refuerza aun más su atractivo

GUILLERMO GINÉS/DANIEL CABALLERO
MADRID

Decía el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en una entrevista concedida a este periódico la semana pasada que los inversores «se marchan de España por la inseguridad jurídica». Lo cierto es que la reforma energética acometida por el Gobierno ha sido la gota que colma el vaso para un buen número de fondos de inversión; algunos de ellos, incluso, planean iniciar una guerra legal contra el Estado. Pero la historia de desconfianza hacia España viene de más lejos: desde que se fueron desvelando las intenciones del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

La semana pasada, un grupo de compañías eléctricas remitió una carta a la Comisión Europea en la que denunciaba que las medidas acometidas por el Ejecutivo generaban «masivas distorsiones, incertidumbres y daños». «Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que inicie de inmediato un análisis en profundidad tanto del real decreto ley como del proyecto de ley del dividendo del CO₂», rezaba la misiva.

La intención del sector es que Bruselas suavice la reforma del Gobierno, que en la práctica supone un rejonazo de 2.600 millones para el sector por poner coto a los denominados 'beneficios caídos del cielo'. Mientras, los fondos de inversión, en un ámbito mucho más privado, ya maniobran para llevar a la Justicia el nuevo decreto del Ejecutivo.

«Hay empresas que no entrarán en el mercado por esta regulación. A los inversores no nos gusta que se cambien las reglas del juego», explican desde un gran fondo de inversión extranjero con presencia en varias compañías del Ibex. «Cuando un mercado está tan caliente como ahora el energético es conveniente no tomar medi-

das drásticas. Los efectos de este decreto se verán a largo plazo», añaden desde este fondo de inversión.

En el caso del sector eléctrico, además, llueve sobre mojado. Porque el recorte a las renovables producido en 2014 desató una batalla legal entre el Estado y el sector que todavía hoy se mantiene abierta. España ha sido condenada en varias ocasiones por esta medida, y los fondos de inversión todavía reclaman unos 10.000 millones de euros en tribunales de arbitraje internacional. «España cuenta con cierta historia en este ámbito y debería ser consciente del coste que tienen este tipo de medidas», aseguran desde este fondo de inversión.

Pero no solo la reforma energética genera dudas. La decisión del Congreso de los Diputados de regular los alquileres que Aena cobra en los locales comerciales de los aeropuertos ha supuesto un mazazo para los inversores del gestor aeroportuario, que está participada al 49% por inversores privados. Fondos como Blackrock y TCI han presionado en el pasado a la empresa semipública para que siga cobrando



Javier Fernández-Lasquetty
Consejero de Economía y Hacienda de la Com. de Madrid

«Las empresas y fondos de inversión ponen el acento en la política fiscal de Madrid»

«Somos líderes en atraer inversión extranjera porque aportamos certidumbre institucional y seguridad jurídica»

las rentas a sus inquilinos, y fuentes del mercado aseguran que ahora defenderán estos intereses en los tribunales. La propia Aena ha amagado con llevar al Tribunal Constitucional la medida aprobada por la Cámara Baja.

La ley de vivienda también mantiene en vilo a un buen número de compañías que han apostado en los últimos años por el mercado residencial español. Preocupa, sobre todo, la intención de Unidas Podemos de limitar los precios del alquiler. Una propuesta que cuenta con el apoyo de varios grupos parlamentarios y a la que todavía se niega el Partido Socialista. De hecho, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ya tumbó en el pasado esta medida tras la presión de determinados fondos de inversión.

Intervencionismo estatal

Más allá de sectores de actividad concretos, en términos generales de la economía española la sensación no es precisamente buena. Y eso que el presidente Pedro Sánchez ha tratado de empeñarse en convencer al capital americano, el más preocupado por la deriva española.

Fuentes cercanas a un gran fondo estadounidense destacan que lo que más reticencias despierta entre los inversores es que el Gobierno pueda cambiarles tan rápidamente y sin consultar las reglas del juego. El dinero es miedoso, que se dice, y buscan una seguridad jurídica que de momento no están encontrando en España. Tampoco hay confianza en